



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós (2022).

DEMANDANTE: VICTOR RAUL JARAMILLO PEREIRA.
DEMANDADO: PROTECCION S.A. y Otros.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO.
DECISIÓN: **REVOCA, ADICIONA, MODIFICA y CONFIRMA.**

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, se reunió para revisar el recurso de apelación interpuesto por ambas partes y el Grado Jurisdiccional de Consulta que se surte en favor de Colpensiones, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor **VICTOR RAUL JARAMILLO PEREIRA**, en contra de **PROTECCION S.A.**, de **PORVENIR S.A.** y de **COLPENSIONES**.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

PORVENIR S.A.

Expone que el fallador de Primera Instancia plantea el intercambio de obligaciones financieras entre entidades administradora de pensiones de diferentes regímenes pensionales, sin la existencia de norma que lo regule. Que los recursos de la seguridad social no pueden ser destinados a cubrir asuntos diferentes a los asignados por la ley, y que las mesadas pensionales en cada régimen tienen bases de financiación diferentes. Que la Sentencia apelada se encuentra alejada de las circunstancias planteadas en la demanda, contrariando el principio de consonancia e imponiéndole una condena excesiva y contraria a derecho. Y finaliza expresando que el acto jurídico suscrito entre las partes, goza de validez y fue producto de la voluntad de estas.

COLPENSIONES.

Solicita que se revoque la Sentencia y se le absuelva de forma integral de las pretensiones, al subestimarse la información suministrada por las AFP y el alcance de la asesoría brindada al momento de la afiliación, con base en la normatividad vigente para tal momento,

sin que se les puedan imponer obligaciones no previstas en el ordenamiento jurídico para tal momento. Que no es cierto que se haya causado perjuicio económico al demandante, quien no tiene derecho algún consolidado, correspondiéndole a este, actuar con diligencia y cuidado frente a su situación pensional; entendiéndose su silencio en el transcurso del tiempo, como una decisión consciente de permanecer en el régimen seleccionado. Que la sentencia de instancia desconoce el principio de sostenibilidad financiera y pone en peligro el derecho a la seguridad social de los demás afiliados al RPMPD. Que la condena a pagar la pensión de vejez al demandante, excede el objeto del litigio, al no haber sido solicitado en la demanda, vulnerando el derecho de defensa y contradicción. Y finaliza manifestando que de resultar procedente la ineficacia se debe ordenar la devolución de la totalidad de los aportes del actor más los rendimientos, sin que puedan ser inferiores a los generados en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPMPD-; y sin que se le pueda imponer condena en Costas Procesales, en virtud de unos perjuicios derivados de obligaciones de terceros.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES:

PRETENSIONES:

- Declarar la Ineficacia del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, entendiéndose que siempre estuvo vinculado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD-; o subsidiariamente, que así se encuentre afiliado al primer régimen referido, al momento del reconocimiento de la pensión de vejez, se le deben aplicar los parámetros del segundo.
- Ordenar a PROTECCIÓN S.A., que devuelva a COLPENSIONES, y a su vez que esta última reciba, todos los aportes cotizados al RAIS, incluyendo los rendimientos, los gastos de administración y los seguros previsionales; y que, a título de perjuicio cancele el cálculo actuarial necesario para que COLPENSIONES pueda cancelar la pensión de vejez en los términos del RPMPD.

HECHOS:

- Que fue cotizante activo del ISS, y en el año 2005 se trasladó del RPMPD al RAIS, sin recibir previamente la asesoría individual requerida, salvo la información grupal, general y parcializada que se suministró frente a los beneficios del RAIS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Declaró que las demandadas faltaron a su obligación de dar información veraz, completa y oportuna al demandante al momento de trasladarse al RAIS, causándole daño en su acceso real y efectivo a la Seguridad social en pensiones. Declaró la Ineficacia de la pérdida del RPMPD por inaplicación constitucional, entendiéndose recuperado el primer Régimen a cargo de PROTECCION S.A. y PORVENIR S.A.. Absolvió a COLPENSIONES de las pretensiones de la demanda. Ordenó a PROTECCION S.A. que dentro del mes siguiente a la petición por escrito que el demandante le haga con el pleno cumplimiento de los requisitos de edad, semanas laboradas y retiro laboral, liquide, reconozca y pague la pensión de vejez con base en el RPMPD; que dentro del mes siguiente le solicite a COLPENSIONES la elaboración del cálculo actuarial con miras a la subrogación pensional; y a ésta última entidad a elaborar el mismo y a presentárselo para que tal AFP proceda a su pago real y efectivo; que asuma el pago de la pensión de vejez del actor bajo el RPMPD, hasta que sea pagado el cálculo a COLPENSIONES, y a ésta última, una vez reciba el pago íntegro del cálculo actuarial empiece a pagar la pensión de vejez al demandante. Autorizó a PROTECCIÓN S.A. a recobrar a PORVENIR S.A., el 25% del valor del cálculo actuarial y a esta última AFP a pagar tal porcentaje; a enjugar parte del cálculo actuarial con los ahorros pensionales del demandante; y Condenó en Costas Procesales a PROTECCIÓN S.A autorizándola a recobrar el 25% a PORVENIR S.A.

RECURSO DE APELACIÓN.

DEMANDANTE.

Dice que se debe modificar la Sentencia, debiéndose acoger los efectos y consecuencias que frente a la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia, ordenándose el traslado del demandante a COLPENSIONES, así como el reintegro de los dineros de la cuenta de ahorro individual, rendimientos, gastos de administración y aportes a la garantía de pensión mínima.

PROTECCIÓN S.A.

Solicita que se revoque la Sentencia emitida por el juez de instancia, la cual desconoce la existencia de 2 regímenes pensionales que coexisten, son excluyentes, y exigen diferentes requisitos para la causación del derecho pensional, brindándole al afiliado la posibilidad de elegir libremente a cual régimen desean pertenecer, para obtener su pensión; sin que exista norma que permita imponer el pago de la pensión de vejez en el RAIS, bajo las características del RPMPD, o que le imponga al Fondo privado la obligación de realizar calculo actuarial alguno para ser trasladado a este último régimen con la finalidad de que sea este el que reconozca la pensión, pues ello, no solo generaría un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES, sino que atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema, que exige el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por cada régimen para la procedencia del derecho a la pensión. Que la parte demandante no acreditó la

existencia de los 3 elementos (daño, culpa y nexo causal), que se exigen para imputar responsabilidad por daño o perjuicio alguno a cargo de la AFP. Y finaliza solicitando que no se le condene en Costas Procesales o de mantenerse las mismas, se calcule en forma diferente las mismas, sin necesidad de recobrar porcentaje alguno a PORVENIR S.A.

PORVENIR S.A.

Dice que no comparte la decisión de instancia sobre la declaratoria de responsabilidad de esta AFP frente al derecho al deber de información y las consecuencias ordenadas por el A quo, sin que pueda existir una subrogación pensional entre una entidad pública y una privada, desconociendo la Sentencia el precedente jurisprudencial que sobre la ineficacia del traslado se ha desarrollado, debiéndose declarar una ineficacia total y no parcial del acto de traslado. Que la Sentencia desconoce el principio de congruencia y la facultad ultra y extra petita que se le concede al juez, al resolver un asunto que no fue objeto de debate. Y pide que no se le impongan Costas Procesales, por ser estas accesorias y al ser válido el acto de traslado de régimen pensional.

COLPENSIONES

Aduce que el sistema pensional establece 2 tipos de regímenes en los que se establece en forma diferente el reconocimiento de las prestaciones; eligiendo el actor, en forma libre a que régimen pretendía pertenecer, correspondiéndole a este la obligación de tomar buenas decisiones al momento del traslado de régimen, sin que pueda beneficiarse de su propia negligencia y sin que se haya analizado el deber de información en los términos de la normatividad vigente al momento del traslado; siendo la inconformidad del actor un asunto económico frente al valor de la mesada pensional en cada uno de los regímenes. Que no se puede desconocer que la Ley prohíbe el retorno o cambio de régimen cuando la persona se encuentra a menos de 10 años de adquirir el derecho a la pensión de vejez, como es el caso del actor. Que la sentencia de instancia le impone a COLPENSIONES la obligación de realizar un cálculo actuarial, lo que no guarda relación con el precedente jurisprudencial sobre la materia, y le impone una obligación a futuro de subrogar la pensión de vejez, pese a que es un tercero ajeno al negocio jurídico, y sin que se pueda afectar el capital de COLPENSIONES, debiéndose asumir cualquier perjuicio sufrido o merma del capital, por parte del Fondo privado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, es o no procedente la declaración de Ineficacia del traslado efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; las consecuencias que de ello se derivan; y lo relativo con las Costas Procesales. Veamos:

En el caso concreto, el aquí demandante se afilió al RAIS a través del Fondo privado de pensiones COLPATRIA S.A. hoy PORVENIR S.A. el **01 de julio de 1995**, tal como consta en la solicitud de vinculación de folios 373 -archivo 01, Primera Instancia-, posteriormente a HORIZONTE S.A. el **20 de febrero de 1998**, según se desprende de la solicitud de afiliación de fl. 374 ibídem.; trasladándose al RPMPD administrado por COLPENSIONES el **11 de febrero de 2003**, según se infiere de la historia laboral de folios 29 ibíd.; y nuevamente al RAIS por medio de ING hoy PROTECCIÓN S.A. el **14 de julio de 2005** tal como consta en la solicitud de vinculación de folios 241 ibíd.; y directamente, a esta última AFP el **10 de junio de 2010**, según se infiere de la solicitud de vinculación de folios 234 ibíd, el historial de vinculaciones de folios 242 ibíd., y el reporte SIAFP -fl. 375 ibíd.-.

Respecto al tema de la Ineficacia de la afiliación y/o traslado de régimen pensional, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Cas. Laboral, vertida en Sentencias Radicados 33.083 del 22 de noviembre de 2011, y 46.292 del 03 de septiembre de 2014, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, y más recientemente en las Sentencias Laborales 1452 del 3 de abril de 2019, Rad 68852 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y 1421 del 10 de abril del mismo año, Rad. N.º 56174 M.P. Gerardo Botero Zuluaga, para los casos de afiliados, las Administradoras de Fondos de pensiones tienen el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculan a ellas, que surge desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación, por lo que el engaño en el que incurre la entidad, tiene su fuente en la falta al deber de información, tanto en lo que se afirma, como en lo que se omite informar sobre lo que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue, independientemente que para el momento del traslado o afiliación en este caso, una norma lo exija o no.

Ahora, respecto a la firma del formulario proforma, en la Sentencia Laboral 1688 del 8 de mayo de 2019, Rad. N.º 68838, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, dicha Corporación sostuvo que:

“... no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada”.

“... la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado...”

En similar sentido, se pronunció dicha Corporación en Sentencia Laboral 4360 del 9 de octubre de 2019, Rad 68852, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, eran PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. las que tenían la obligación de probar en el proceso que le brindaron una

asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su afiliación y/o traslado de régimen, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, actualizado con el IPC-, debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de afiliación, para que la misma sea realmente consensuada, libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que la labor del funcionario del Fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectiva la afiliación o el traslado de régimen, debe trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral; en la medida que es responsabilidad de dichas Administradoras y de sus promotores, velar por la información realmente suministrada a sus usuarios -art. 10 Decreto 720 de 1994 por el cual se reglamentaron los Arts.105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993-; lo cual fue reiterado en el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2255 de 2010, que le impone a las Administradoras de pensiones en desarrollo de tal deber, la obligación de proporcionar a los consumidores financieros, la información completa, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de tal decisión.

Ahora, si bien PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. afirmaron al contestar la demanda que al demandante se le brindó la asesoría requerida para el caso –fls. 176 a 233 y 324 a 365 *ibíd.*, respectivamente-, de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenían la carga de acreditarlo, y sin embargo, la prueba que trajeron al proceso no fue lo suficientemente persuasiva de ello, pues nótese que los formularios de afiliación ya referenciados corresponden a unos preestablecidos que no dan cuenta de la información realmente suministrada al demandante en ese momento; y sin que con los comunicados de prensa de fls 270 a 272 *ibíd.* -genéales e ilegibles-, el documento denominado “carta validación asesoría” –fls 240 *ibíd.*-, o el hecho de haber realizado este actos de relacionamiento -como es recibir extracto, haber permanecido un largo periodo de tiempo en el RAIS o haber efectuado traslados entre AFP´s-, pueda darse por ratificado el acto inicial de traslado de régimen pensional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 898 del Código de Comercio, pues como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de la información se juzga es al momento del acto jurídico de afiliación o

traslado según el caso, y no con posterioridad al mismo –Sentencia Laboral 1688 de 2019 antes citada, en la que se reitera lo expuesto en la también citada Sentencia 19447 de 2017-.

Por otro lado, es cierto que el demandante no acreditó en el proceso haber tenido afiliación alguna al entonces ISS hoy COLPENSIONES antes del **1 de julio de 1995** -primera vinculación al Fondo privado de pensiones-, por el contrario, se acreditó con el bono pensional obrante a folios 254 ibíd., que antes de su afiliación al otrora COLPATRIA S.A., se encontraba vinculado al Municipio de Guarne; quedando demostrado con las ya referidas solicitudes de vinculación, que su afiliación al régimen pensional solo se dio efectivamente en el mes de julio de 1995, por lo que conforme al Artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en consonancia con los artículos 3° y 4° inciso 4° del Decreto 692 de 1994, contaba con la posibilidad de seleccionar el RPMPD administrado por Colpensiones, lo que considera la Sala que implícitamente hizo el actor al solicitarle a esta última entidad su afiliación el 11 de noviembre de 2016 –fl. 37 ibíd.-, y presentar la demanda vinculándola en calidad de demandada; la cual además, es la única entidad que en la actualidad administra el RPMPD según lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.

Y es que advierte la Sala que no existen razones de peso que permitan aplicar a los recién afiliados al Sistema General de Pensiones, es decir, a casos de selección inicial de régimen, de manera diferenciada la postura que sobre el traslado de régimen pensional ha construido la jurisprudencia laboral, toda vez que en uno y otro caso lo que se está violentando es el derecho a la selección libre y voluntaria de régimen pensional, previo conocimiento pleno de las consecuencias jurídicas y económicas que se derivan de dicha elección, conforme al Art 13 literal b de la ley 100 de 1993, antes citado.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió una de las solemnidades legalmente previstas para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, como lo es el deber de información en un asunto tan importante para un afiliado por su incidencia en el derecho pensional, trayendo como consecuencia la declaración de Ineficacia de la afiliación y/o traslado de régimen, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes del mismo, como que el demandante nunca se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; no teniendo en criterio de la Sala ninguna incidencia el hecho de que a él le falten menos de 10 años para cumplir la edad mínima para obtener la pensión de vejez, pues como quedó explicado precedentemente, al declararse la ineficacia de la afiliación, las cosas vuelven al estado en el que se encontraban anteriormente. **CONFIRMA** por otras razones.

Ahora, frente a las órdenes impuestas en primera instancia a cerca del reconocimiento del derecho a la pensión de vejez una vez el demandante la solicite previo cumplimiento de los requisitos mínimos para ello, el pago del cálculo actuarial por parte de las AFP's del RAIS

y la subrogación pensional, aspectos recurridos por las demandadas, es pertinente señalar que en criterio de la Sala, las mismas no proceden, ya que en el proceso no se probaron perjuicios adicionales a los que generaron la consecuencia jurídica de la declaración de ineficacia, la devolución de los saldos de la cuenta de ahorro individual y sus demás componentes. **REVOCA – ABSUELVE.**

TRASLADO DE SALDOS.

Considera la Sala que al declararse la Ineficacia de la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que PROTECCIÓN S.A. -Fondo en el que actualmente se encuentra afiliado el demandante- traslade a COLPENSIONES el 100% de los aportes obligatorios efectuados por este, esto es, el saldo de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos financieros, los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la prima de reaseguros de Fogafín y en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional, causados durante el tiempo en que el mismo estuvo afiliado a dicha Administradora, incluido el tiempo en que permaneció en la fusionada ING; correspondiéndole a PORVENIR S.A. devolver los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la prima de reaseguros de Fogafín y los aportes al Fondo de solidaridad pensional -en caso de haberse generado-, descontados durante el tiempo en que el actor estuvo afiliado a dicha Administradora, incluido el tiempo en que permaneció en las entidades fusionadas (Colpatria S.A. y Horizonte S.A.). Lo anterior, según lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral desde la Sentencia Radicado 31.989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, y más recientemente en las Sentencias Laborales 4.989 y 4.964 del 14 de noviembre de 2018, Radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, y en la 1.688 del 8 de mayo de 2019, Radicado 68.838 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Tal obligación deberá cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia –artículo 16 Decreto 692 de 1994-.

La Sala se permite resaltar que el precedente judicial proveniente de los máximos Órganos de cierre tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria, vincula a los demás jueces, es decir, es de obligatorio cumplimiento, al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU 354 del 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, en la que manifestó:

“Según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento...”

(Otra Providencia en similar sentido, es la SU 611 del 4 de octubre de 2017, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Tal obligación deberá cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia –artículo 16 Decreto 692 de 1994-. **ADICIONA - CONDENA.**

Aunado a lo anterior, advierte la Sala que el traslado de los recursos y la información respectiva, debe hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema Generade Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, "...junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...", según lo sostuvo la Sala de Cas. Lab. de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia Laboral 1637 del 11 de mayo de 2022, Radicado 89208, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz. **ADICIONA - CONDENA.**

Ahora, en relación con la sostenibilidad financiera del sistema y la protección del derecho a la seguridad social de los demás afiliados al RPMPD, advierte la Sala que con el traslado del 100% de las cotizaciones efectuadas por el demandante a lo largo de su vida laboral, y los rendimientos financieros, se contribuye al fondo común de naturaleza pública.

Así mismo, se **ORDENARÁ** a Colpensiones recibir las sumas provenientes de PROTECCIÓN S.A., y PORVENIR S.A. para financiar la pensión de vejez del actor.

COSTAS PROCESALES.

El artículo 365 del Código General del Proceso, establece:

"En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso..."

Sobre este tópico, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia del 22 de enero de 2013, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, Rad. 40,993 sostuvo:

"Al respecto es preciso anotar que la disposición referida contiene un criterio objetivo, dado que no condiciona su imposición a circunstancia distinta a la pérdida del proceso o uno de los recursos a que se refiere, de allí que el actuar de buena fe no constituye razón de exoneración de la obligación que tiene la parte vencida de pagar los gastos generados con ocasión del proceso"

El mismo criterio viene siendo reiterado por dicha Corporación en las Sentencias 2.141 de 2019, Radicado N° 53.941, M.P Omar de Jesús Restrepo Ochoa, y 1.107 del 2019, Radicado N°61.008, M.P. Cecilia Margarita Durán Ujueta.

Conforme al anterior criterio jurisprudencial, la condena en Costas Procesales atiende a un criterio de carácter objetivo a cargo de la parte vencida en el proceso, por lo que al haber

prosperado las pretensiones de la demanda, declarándose la ineficacia de la afiliación y condenándose a PROTECCIÓN S.A., y a PORVENIR S.A. a la devolución del 100% de las cotizaciones, incluyendo los gastos de administración con todos sus componentes, resultando estas vencidas en el proceso, hay lugar a las Costas Procesales de Primera Instancia a cargo de las mismas, distribuidas en partes iguales a cargo de cada una de ellas, y a favor de la parte activa. Liquídense. **MODIFICA.**

Sin embargo, respecto a Colpensiones, lo cierto es que no debe desconocer la Sala que no fue ella la entidad que ocasionó la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, por lo que no hay lugar a estas a cargo de tal entidad. **CONFIRMA.**

Sin **COSTAS PROCESALES** en esta instancia, las cuales no se causaron dada la prosperidad del recurso interpuesto por la parte demandante y la prosperidad parcial de los recursos interpuestos por las demandadas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE:

PRIMERO: REVOCAR los numerales **SEGUNDO, TERCERO**, del **SEXTO** al **NOVENO** y parcialmente el **CUARTO**, de la Sentencia proferida por el **Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín** el 4 de diciembre de 2020, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el señor **VICTOR RAUL JARAMILLO PEREIRA**, en contra de **PROTECCION S.A.**, de **PORVENIR S.A.** y de **COLPENSIONES**, en la que se declaró que las dos primeras demandadas le causaron al demandante daño en su acceso real y efectivo a la seguridad social en pensiones, ordenándole a estas el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos del RPMPD, la elaboración y pago del cálculo actual y la subrogación pensional a cargo de Colpensiones; para en su lugar, **ABSOLVER** a las demandadas de tales condenas.

SEGUNDO: ADICIONAR la Sentencia de origen y fecha conocidos, en cuanto que se **CONDENA** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a Colpensiones el 100% de los aportes obligatorios efectuados por el demandante, esto es, el saldo de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos financieros, los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la prima de reaseguros de Fogafín y en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional, causados durante el tiempo en que el mismo estuvo afiliado a dicha Administradora, incluido el tiempo en que permaneció en la fusionada ING;

correspondiéndole a PORVENIR S.A. devolver los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la prima de reaseguros de Fogafín y los aportes al Fondo de solidaridad pensional -en caso de haberse generado-, descontados durante el tiempo en que el actor estuvo afiliado a dicha Administradora, incluido el tiempo en que permaneció en las entidades fusionadas (Colpatria S.A. y Horizonte S.A.); entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado. Obligación que deberá cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, según las consideraciones de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a Colpensiones que reciba las sumas provenientes de PROTECCIÓN S.A., y de PORVENIR S.A. para financiar la pensión de vejez del actor.

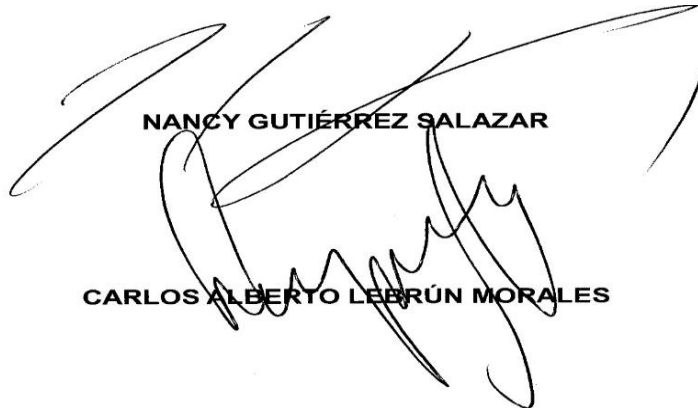
CUARTO: MODIFICAR el numeral **DECIMO** de la sentencia de origen y fecha conocidos en cuanto que las Costas Procesales de Primera Instancia, quedaran a cargo de PROTECCIÓN S.A., y de PORVENIR S.A., distribuidas en partes iguales a cargo de cada una de estas, y a favor de la parte activa. Liquidense.


QUINTO: CONFIRMAR en lo demás.

SEXTO: Sin Costas Procesales de segunda Instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO** y se firma en constancia.

Los magistrados,


NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ